**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SALA CIVIL-FAMILIA**

Magistrada Sustanciadora
ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

Manizales, treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el procurador judicial del señor Hernán Adolfo Orozco Gutiérrez, contra el auto proferido el 28 de agosto hogaño por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná-Caldas, donde se negó la solicitud de levantamiento de medida cautelar presentada por aquel, al interior del trámite de Jurisdicción Voluntaria para declarar la interdicción por discapacidad mental a favor de la señora Teresa de Jesús Gutiérrez López.

II. ANTECEDENTES

2.1. En el despacho de origen se encuentra el proceso a través del cual se pretendió la declaratoria de interdicción y rehabilitación de la señora Teresa de Jesús Gutiérrez López, amén de la designación de un guardador definitivo; trámite que en la actualidad, en virtud de lo regulado por la Ley 1996 de 2019 está suspendido, habiéndose decretado antes de ello sendas medidas cautelares respecto a los bienes de la señora Gutiérrez López.

2.2. El señor Hernán Adolfo Orozco Gutiérrez, quien funge en calidad de persona de apoyo de la señora Teresa de Jesús, mediante memorial allegado el 14 de agosto pasado requirió el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda que pesa sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-17473 aduciendo la necesidad de enajenarlo por cuanto el dinero se destinaría a cubrir diversos gastos de la propietaria, siendo indispensable ya que las autoridades notariales se niegan a realizar cualquier anotación en el predio mientras esté vigente la medida.

La procedencia de su petición la fundamentó en el contenido de los artículos 597 N° 1, 159 y 162 del Código General del Proceso, bajo el entendido que por ser él quien en inicio instó por el decreto de la cautela, así mismo se encontraba facultado para deprecar su levantamiento y si bien el proceso se encuentra suspendido, la hipótesis se encuadra en la excepción prevista por la norma, acorde la cual pueden ejecutarse actuaciones tendientes a adoptar medidas urgentes y de aseguramiento.

2.3. El Juzgado cognoscente, a través de auto fechado 28 de agosto de 2020, denegó lo requerido, remitiéndose para ello a los argumentos vertidos en las decisiones del 4 de diciembre de 2019 y 5 de agosto de esta calenda, según las cuales, en síntesis, por estar el trámite suspendido desde el 4 de septiembre de

2019 con los efectos adjetivos inherentes a dicha situación, no era posible resolver los pedimentos elevados.

2.4. Tal determinación fue recurrida en reposición y subsidiariamente apelación por el peticionario, quien expuso como motivos de disenso que el Funcionario no tuvo en cuenta los razonamientos proporcionados en cuanto a la pertinencia de acceder a lo requerido, ya que es urgente para asegurar la correcta administración de los bienes de la protegida quien es la única beneficiada con la venta.

2.5. A través de proveído datado 24 de abril pasado, el Funcionario de instancia resolvió negativamente la solicitud, argumentando para dicho fin que la cautela fue decretada en aras de brindar protección a la señora Gutiérrez López sin que de lo indicado por el señor Hernán Adolfo derive una medida urgente y de aseguramiento en los términos contemplados por la normativa procesal civil; a más que la finalidad de la inscripción de la demanda, esto es, la advertencia a terceros de que el bien queda afecto a las resultas judiciales, justifica plenamente su permanencia para salvaguardar los intereses de la beneficiaria.

Aunado a ello, indicó que la designación del señor Orozco Gutiérrez como personal de apoyo judicial de la señora Teresa de Jesús se hizo en acatamiento de lo dispuesto por este Colegiado al interior de una acción de tutela, sin que eso implicara que el trámite se había reanudado, pues la suspensión, cuyas consecuencias procesales son de orden público, aún se encontraba vigente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema Jurídico

Corresponde a la Magistratura definir, de acuerdo con los planteamientos esbozados por el recurrente, así como las disposiciones normativas aplicables, si el levantamiento de la cautela obrante sobre el inmueble propiedad de la señora Teresa de Jesús resulta viable, sin perjuicio de la suspensión que por orden legal existe sobre este tipo de trámites la cual impide al judicial adelantar actuaciones.

3.3. Supuestos normativos

3.3.1. Recientemente fue publicada la Ley 1996 de 2019 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYORES DE EDAD"* cuyo fin primordial es la protección de la autonomía de los ciudadanos que hacen parte de esta población, todo en aras de privilegiar su libertad e independencia en la toma de decisiones que los afecta como manifestación clara del ejercicio efectivo de sus derechos, previendo para dicho fin, en los casos de ser necesaria, la designación de un apoyo adecuado representado en una persona de confianza que debe reunir las diferentes características de que trata la norma, siendo su función asistir a la persona en situación de discapacidad.

En concordancia con lo anterior, el artículo 53¹ del precepto en comento, contempló la prohibición para el inicio de procesos de interdicción o inhabilitación a partir de su promulgación, a la par de la suspensión inmediata de los trámites de dicha naturaleza que estuvieren en curso disponiendo como hipótesis excepcional para su levantamiento la necesidad de aplicar medidas cautelares, nominadas o innominadas, dirigidas a la tutela y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona.²

Finalmente, cabe resaltar que el Código General del Proceso regula de manera general lo atiente a la interrupción y suspensión del proceso mediante los artículos 159 y 162, respectivamente, señalando de manera taxativa sus causales y efectos, entre los que están: "(...) **no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.**" (Negrillas del Despacho)

3.4. Supuestos fácticos

Vistos los argumentos proporcionados por la censura, se advierte que su desavenencia se cierne frente a la negativa del Despacho de disponer el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda que se encuentra registrada en uno de los inmuebles de la señora Teresa de Jesús, ya que en su concepto la venta del bien que no ha podido realizar, acorde informa, por la vigencia de la medida, se aviene necesaria a efectos de continuar la correcta administración de los bienes de la citada persona.

Así mismo se advierte que la decisión del Despacho se finca de forma principal en la suspensión que del proceso fue determinada por la Ley 1996 de 2019 que proscribe adelantar la actuación deprecada por el recurrente, a más de la conveniencia de mantener la cautela por cuanto con ella se propende por la protección del patrimonio de la propietaria.

Descendiendo al caso concreto, a juicio de esta Magistratura se tiene que los planteamientos expuestos por el Despacho de primer nivel se erigen en suficientes y razonables para denegar el levantamiento de la medida cautelar, conforme pasa a explicarse:

En primer lugar se advierte que la consecuencia de la suspensión del trámite en el sentido de no poder ejercerse acto jurisdiccional de ningún tipo deviene claramente establecida por las disposiciones adjetivas civiles, sentando así mismo el artículo 159 del Estatuto Procesal un evento excepcional en las hipótesis que sea menester adoptar "*medidas urgentes y de aseguramiento*". De igual modo, el artículo 55 de la plurimencionada Ley 1996 de 2019 que dispuso la suspensión

¹"Prohibición de interdicción. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley."

²"Procesos de interdicción o inhabilitación en curso. Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. El juez podrá decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad."

inmediata de los procesos de interdicción en curso, contempló la posibilidad de levantarla a fin de aplicar: "(...) *medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad.*"

Vista la solicitud del levantamiento de la cautela, se advierte que la razón que la sustenta no se acompasa a dichos presupuestos de urgencia y de aseguramiento en la medida que esas situaciones no fueron aludidas, ni menos acreditadas con el requerimiento, sino que allí se limita a mencionar que la venta del inmueble es necesaria para la correcta administración de los bienes de la señora Gutiérrez López. Si bien con antelación a la solicitud que aquí se trata, se había petitionado la autorización para la venta del bien, respaldada en la premura de realizar el pago del impuesto predial de otros fundos propiedad de la señora Teresa de Jesús, amén de solventar gastos destinados a diversos proyectos, es necesario advertir que pedimentos de esa naturaleza cuentan con un trámite especial previsto por el ordenamiento jurídico, motivo que descarta la posibilidad de instarlo al interior del proceso que por mandato legal se encuentra suspendido.

Análogamente cabe advertir que lo petitionado no fue una medida cautelar dirigida a garantizar la protección y disfrute de los derechos de la afectada, lo que de contera veda al Juzgado de conocimiento para levantar la suspensión en los términos del citado artículo 55 y por el contrario, mantener la inscripción de la demanda sobre el inmueble es la forma idónea de asegurar la integridad del patrimonio entre tanto no sea demostrado por medio del procedimiento respectivo, la necesidad, conveniencia y pertinencia de la enajenación en aras de privilegiar los intereses de la señora Gutiérrez López, quien por sus circunstancias de salud es sujeto de especial protección constitucional.

3.5. Conclusión

Conforme lo discurrido, se impone confirmar el proveído impugnado dado que las razones ofrecidas por la censura para acceder a su solicitud, no se encuadran dentro de los supuestos excepcionales previstos por la normativa vigente a fin de adelantar actuaciones en trámites suspendidos; amén que la cautela obrante en el bien inmueble de la propietaria tiene como fin la tutela efectiva de su patrimonio mientras no se acredite por los medios correspondientes la pertinencia y necesidad de las transacciones que pretenden adelantarse sobre aquél.

3.6. Costas

Sin condena en costas por la naturaleza del asunto.

IV. DECISIÓN

Por lo anterior, la Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales- Sala de Decisión Civil Familia, **CONFIRMA**, el auto proferido el 28 de agosto de 2020, por medio del cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná - Caldas, negó el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre bien inmueble, dentro del proceso de interdicción

por discapacidad mental iniciado a favor de la señora Teresa de Jesús Gutiérrez López.

Por Secretaría **DEVUÉLVASE** el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS
Magistrada

Firmado Por:

ANGELA MARIA PUERTA CARDENAS
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 6 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR MANIZALES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

ceb3e047ea3ea323729f62ba08120bb659e08635d94fb59f48557c74ab268a8e

Documento generado en 30/09/2020 12:30:24 p.m.